

Impacto en Colombia

Fernando Cepeda

El 11 de setiembre impactó de dos maneras a Colombia. En primer lugar, produjo un endurecimiento del clima de opinión que bien pronto comenzó a reflejarse en las encuestas que medían la aceptación de los candidatos presidenciales. El candidato Álvaro Uribe Vélez comenzó a encontrar un ambiente mucho más propicio para su plataforma política que privilegiaba el tema de la seguridad interna cuando los otros postulantes a la presidencia le daban prioridad al empleo (Noemí Sanín), a la crisis social (Horacio Serpa) o a la reconciliación (Lucho Garzón).

El segundo impacto tuvo que ver con el proceso de paz de la administración de Pastrana. Durante la primera semana de octubre (apenas algunas semanas después del 11 de setiembre) se vencía otro de los plazos fatales para la prórroga de la zona de distensión. El gobierno buscaba afanosamente un acuerdo con la guerrilla de las FARC para justificar una prórroga más de la criticada zona desmilitarizada. De por medio estaba el documento elaborado por la así denominada comisión de notables en el cual por primera vez se planteaba un esquema político para la nego-

ciación y para la disminución de la intensidad del conflicto.

El gobierno logró suscribir un acuerdo que se denominó "San Francisco en la sombra". Dos días después el Presidente de la República declaró que se establecerían controles externos en la zona de distensión. ¡Ahí fue Troya! El comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, consideró que era inadmisibles que el gobierno adoptara unilateralmente decisiones sobre la zona sin haberlas planteado en la mesa de negociaciones. En consecuencia, declaró que el proceso se congelaba y, con él, el acuerdo de San Francisco.

El gobierno primero justificó esos controles en nombre de la soberanía nacional, y más adelante arguyó que estos siempre habían existido. El proceso se paralizó y tan solo el 24 de diciembre, en plena celebración navideña, se produjo un encuentro entre el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, y miembros del secretariado. Así se reanudó un proceso de conversaciones que desembocó en una ruidosa

Fernando Cepeda es profesor de Ciencia Política de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Bogotá.



crisis a mediados de enero, cuando el alto comisionado proclamó ante el país que el gobierno "entendía" que las FARC daban por terminado el proceso de negociaciones y solicitaban cuarenta y ocho horas para abandonar la zona (en realidad, para retirarse de las cinco cabeceras municipales).

La participación de la comunidad internacional, de la ONU y de los embajadores de los países facilitadores permitió que las conversaciones se reanudaran y que, finalmente, el 20 de enero los embajadores constataran que no obstante los controles externos a la zona, ambas partes aceptaban que existían las garantías para continuar el proceso. De esta manera se pasó a una negociación en virtud de la cual se acordó un cronograma que, eventualmente, debía llevar a un cese del fuego en el mes de abril. (No sobra recordar que el 10 de marzo se realizaban las elecciones

para el Congreso, y el 26 de mayo las presidenciales.)

A partir del 20 de enero se produjo la mayor ola de terrorismo de que se tenga noticia en Colombia. Hasta el acueducto de Chingaza, que proporciona el agua a Bogotá, fue atacado. Si la carga explosiva hubiera producido un daño mayor se habría generado una tragedia humana de proporciones bíblicas. El 20 de febrero las FARC secuestraron un avión, lo hicieron aterrizar en un municipio cercano a la zona de distensión y secuestraron al senador Guechen Turbay. Al mismo tiempo, la voladura de un puente en Antioquia afectó a una ambulancia y a particulares. La copa se había desbordado. El presidente Pastrana consideró que el espacio político para continuar el proceso se había agotado e inmediatamente procedió a realizar los preparativos para informarle al país que el proceso de paz con las FARC había terminado.

Hasta el momento el gobierno se había abstenido de calificar a las FARC como terroristas y, mucho menos, como narcotraficantes. El 25 de febrero el presidente Bush hizo unas declaraciones en las que afirmó en forma contundente que la ayuda del Plan Colombia no puede utilizarse para atacar a las guerrillas. Al día siguiente el presidente Pastrana, en un discurso televisado, declaró que las FARC son terroristas y narcotraficantes. En la primera semana del mes de marzo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recogió este calificativo en una resolución que fue aprobada por unanimidad, y en ella solicitó que el gobierno procediese a flexibilizar la ayuda para Colombia para que esta pudiese ser utilizada contra los narcoterroristas.

Para esta época Álvaro Uribe se había catapultado como el vencedor en las elecciones. Ya se hacían predicciones fundamentadas de que podría ganar en la primera vuelta. Es eso lo que ocurrió el 26 de mayo.

Así las cosas, el 11 de setiembre contribuyó a la ruptura del proceso de paz, porque los controles externos que dispararon la crisis no habrían sido posibles sin la presión de los Estados Unidos. Y el endurecimiento de la opinión pública no dejó espacio para continuar el proceso luego de la ola terrorista. Asimismo, el endurecimiento internacional y el nacional le abrieron una ancha avenida a la candidatura presidencial de Álvaro Uribe, hoy presidente de Colombia. ▲